

Comportamiento electoral, exclusión social y propuestas constitucionales. El escenario político en Perú y Venezuela durante las reformas estructurales *

*Pablo Biderbost y Giselle de la Cruz Hermida ***

Resumen

En el decenio de 1990, en el espacio latinoamericano, acontece la aplicación de las políticas neoliberales que se enmarcaban en el llamado “*Consenso de Washington*”. La implementación de este conjunto de medidas tenía por objeto asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía y proceder a la desregulación de la actividad de los diversos agentes privados. El Estado debía abandonar su antiguo rol subsidiario, proteccionista y benefactor que le había caracterizado hasta entonces.

Mientras se procedía a la consecución de la estabilización macroeconómica y a la reversión de un proceso crónico de decrecimiento del Producto Interno Bruto, se observa, en determinados países latinoamerica-

* Este artículo representa un avance respecto a lo discutido y problematizado en BIDERBOST, Pablo (2007). “El voto ciudadano en tiempos de ajuste estructural y exclusión social. Perú y Venezuela en perspectiva comparada” en *Papel Político*, ISSN 0122-4409, Vol. 12, N° 1, 2007, págs. 13-38”.

** Pablo Biderbost es investigador del Instituto de Estudios de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. G. de la Cruz Hermida es doctoranda en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca.

Código de referato: SP.50.XV/08.

STUDIA POLITICÆ



Número 15 ~ invierno 2008.

Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.

nos, un ingente incremento de dos de los indicadores más importantes de exclusión social: la pobreza y el desempleo. El alza en ambos registros es consecuencia de la destrucción del otrora Estado satisfactor de necesidades sociales de diverso índole y del nuevo escenario de competencia al que fueron sometidos los empresarios nacionales previamente beneficiados por el perfil sustitutivo de importaciones de la economía. Estas transformaciones fueron ejecutadas por partidos políticos tradicionales que viraron hacia la derecha económica o por agrupaciones partidarias dirigidas por *outsiders* que se presentaban a sí mismos como la antítesis de la *política* que había conducido a tal situación de caos macroeconómico.

El objetivo del presente trabajo es indagar respecto al comportamiento del electorado en momentos en los que se observa un aumento sostenido de los índices de pobreza y desempleo en Perú y Venezuela, Estados en los que acontece, paralelamente, una desinstitucionalización de su tradicional sistema de partidos políticos que condujo, con el paso de los años, a la puesta en marcha de procesos constituyentes que tendían a legitimar las propuestas políticas de aquellos líderes políticos no tradicionales.

Abstract

During the '90's, the application of neoliberal policies takes place in Latin America. They were part of the famous "Consensus of Washington". The implementation of this new set of measurements aimed to assure the stability and the growth of the economy and proceed to the deregulation of the activity of the diverse private agents. The State had to leave out its former subsidiary role, protectionist and benefactor. In one side, the new policies facilitated the attainment of the stabilization of the economy and the reversion of a chronic process of decrease of the Internal Brute Product but, at the same time, they produce, in some Latin American countries, an enormous increase of two of the most important indicators of social exclusion: the poverty and the unemployment.

The rise in both records, as diverse authors have recounted, it is a consequence of the destruction of the ancient State satisfactor of social needs of diverse nature and of the new stage of competition in which the national businessmen, before benefited by the substitute profile of imports of the economy, must play a new role. These transformations were executed by traditional political parties that veered towards neo liberal positions or by groups directed by outsiders who presented themselves as the antithesis of the politics that had led to such a situation of macroeconomic chaos.

The object of this work is to investigate in the field of the electoral behavior in moments in which is observed an increase in the indexes of poverty and unemployment in Peru and Venezuela, states in which it happens, in a simultaneous way, a des-institutionalization of its traditional system of political parties. This des-instituzionalization drove to the implementation of constitutional processes in order to legitimize the policies proposed by these non-traditional political leaders.

1) Introducción

EL objetivo de este documento es responder el interrogante que se plantea en torno al comportamiento del voto ciudadano durante la década de los noventa, periodo en el que acontece, en el plano latinoamericano, la puesta en marcha de los planes de ajuste estructural que se auspiciaban en el marco del denominado “*Consenso de Washington*”⁴ (Torre 1998) (Paramio 2006). La puesta en marcha de este conjunto de medidas pretendía asegurar la estabilidad y el crecimiento de la economía, luego de la denominada, en la jerga macroeconómica, década perdida y proceder a la desregulación de la actividad de los diversos agentes privados. El Estado, según los mecanismos enunciados, debía superar su histórico rol subsidiario, protectionista y benefactor que le había caracterizado hasta entonces y que había conducido a procesos hiperinflacionarios (Guerra y Ponce Moreno, 2005).

Mientras tuvo lugar la consecución de la estabilización de la economía y la reversión de un proceso crónico de decrecimiento del Producto Interno Bruto, se observó, en América latina, un ingente aumento de dos de los indicadores más importantes de exclusión social: la pobreza y el desempleo. El alza en ambos registros, según ha referido la literatura especializada, es consecuencia de la destrucción del aparato del otrora Estado satisfactor de necesidades sociales de diverso índole y del nuevo escenario de competencia al que fueron sometidos los empresarios nacionales previamente beneficiados por el perfil sustitutivo de importaciones de la economía (Cieza y González 2005). Dichas transformaciones fueron ejecutadas por partidos políticos tradicionales que viraron hacia la derecha económica o por agrupaciones dirigidas por *outsiders* que se presentaban a sí mismos como la antítesis de la *política* que había conducido a tal situación de caos económico (Paramio, 1999).

En sintonía con lo referido, el presente artículo indaga, comparativamente, respecto al comportamiento electoral en momentos en los que se observa un aumento sostenido de los índices de pobreza y desempleo en Perú y Venezuela, estados en los que acaece, de manera simultánea, una pérdida de institucionalización de sus tradicionales sistemas de partidos políticos (Mainwaring y Scully 1995) (Freidenberg y Alcántara 2005). Este proceso de transformación en el sistema de partidos condujo a la creación de un escenario propicio para la puesta en marcha de procesos de regeneración

⁴ Se entiende por Consenso de Washington al acuerdo entre economistas, que adscribían a diversos paradigmas al interior de la disciplina, que tenía por objeto establecer la mejor respuesta a la crisis por la que atravesaban las economías latinoamericanas. Para un mayor detalle respecto a su influencia en las políticas económicas latinoamericanas, ver ALCÁNTARA, Manuel y OTROS (2006), *1980-2005. El retorno a la democracia*. Síntesis, Madrid, Vol. 6.

constitucional (De La Cruz Hermida 2008). Los datos necesarios para su elaboración fueron obtenidos a partir de la información disponible en las páginas web oficiales de los organismos electorales de los estados referidos, de la base de datos de CEPAL sobre indicadores macroeconómicos y en otras fuentes.⁵ El texto se estructura en cinco secciones: la primera de ellas detalla la historia de las recientes reformas económicas y su contexto político en ambos estados. A posteriori, se hace una escueta mención de la teoría económica del voto ciudadano. En el siguiente apartado, se menciona, por un lado, la evolución en los países involucrados de los indicadores sujetos a estudio (pobreza y desempleo) y, por el otro, el comportamiento electoral paralelo. En el cuarto capítulo, se profundiza respecto a los elementos contextuales que condujeron a la creación de un escenario favorable a la creación de nuevos regímenes constitucionales. Por último, se presentan unas conclusiones tentativas sobre la cuestión.

2) El tiempo de las reformas económicas

2.1) *El proceso fujimorista. El ascenso, auge y salida del outsider peruano.*

En el caso peruano, las reformas estructurales acontecen en un contexto de deterioro de la institucionalidad democrática. Durante la década de 1980, su escenario político se caracterizó por una pérdida progresiva del apoyo ciudadano expresado hacia los partidos políticos tradicionales. En la primera mitad del decenio, el gobierno de Belaúnde (Acción Popular) intentó la puesta en marcha de un plan de ajuste presupuestario que, dificultosamente, pudo conciliar con su política activa de promoción de la obra pública. La insoportable presión inflacionaria, el cuadro de pobreza antediluviana en el que se encontraba sumida la mitad de la población y la corrupción imperante provocaron, entre los electores, la búsqueda de una alternativa. Llega, entonces, al poder Alan García, delfín político del histórico partido aprista (Alianza Popular Revolucionaria Americana - APRA) en 1985.⁶

Durante la gestión de Alan García, se ensaya una estrategia populista centrada en la redistribución de recursos hacia los sectores más pobres de la

⁵ Las páginas web de los organismos electorales son: para el caso peruano, <http://www.onpe.gob.pe/>. (Oficina Nacional de Procesos Electorales). Para el caso venezolano, <http://www.cne.gov.ve/> (Consejo Nacional Electoral). La página web de CEPAL es: <http://www.eclac.cl/>. Se consultó también la página web del Banco Central de Reservas de Perú: <http://www.bcrp.gob.pe/>.

⁶ El APRA había superado la crisis motivada, en términos institucionales, por la muerte de su fundador, Raúl Haya de la Torre, en 1980.

población. En tal sentido, se ejecuta una política económica que privilegiaba el subsidio de precios y la protección de las empresas nacionales. En 1987, García, a fin de evitar la continuidad en la fuga de capitales, procura nacionalizar el sistema financiero, lo que origina la movilización de vastos sectores de la derecha política. Los últimos años de su gestión pueden ser descritos a partir del recrudescimiento de los indicadores inflacionarios y, en consecuencia, del empeoramiento de las condiciones de vida de los pobres y asalariados urbanos (Paramio 2006).

En estas circunstancias, Alberto Fujimori accede al poder como candidato presidencial de Cambio 90, una fuerza política que se describía a sí misma como movimiento cívico independiente (CIDOB 2005). El candidato peruano-nipón no poseía antecedentes de militancia política, aunque se recordaba su relativamente exitosa gestión como rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina y su presidencia de la Asamblea Nacional de Rectores. En la campaña electoral, su discurso se concentró en la necesidad de hallar una vía distinta para el progreso del país a la que habían ofrecido los partidos políticos tradicionales. Su objetivo era la “*moralización de la política*” y el llevar a la práctica los valores de la honestidad y el trabajo. Al mismo tiempo, procuró que se lo identificase con los estratos poblacionales más postergados de la sociedad peruana en abierto antagonismo con la propuesta de quien era su principal opositor, el literato Mario Vargas Llosa, quien encabezaba el centro derechista Frente Democrático (Degregori 1993).

Fujimori, una vez en el poder, se separa de las propuestas populistas que había presentado en el periodo pre-eleccionario y aplica la receta neoliberal que había propuesto su competidor. Su plan económico buscaba erradicar la hiperinflación, abandonar el proceso recesivo y disminuir la carga de la deuda externa. Para ello, intentó favorecer la incorporación de Perú en esquemas de integración regionales e internacionales. Se procede, entonces, a la apertura total de la economía y a desarmar las megaestructuras estatales que actuaban como generadoras de empleo público (Stokes 2002).

Si bien se había logrado detener la espiral inflacionaria y se observaba un tímido crecimiento del PBI, todo ello se encontraba acompañado de costes sociales altísimos. Las cifras del desempleo, el empleo no formal, la pobreza y la indigencia se habían disparado y condenaban a la marginación a miles de peruanos. A diferencia de lo sucedido en otros estados latinoamericanos, Fujimori compensa este retroceso en variables sociales y económicas con la puesta en marcha de una política clientelar integral que tiende a satisfacer no sólo las necesidades de los más perjudicados por el ajuste estructural sino también las de ciertos miembros de otros grupos de la sociedad vinculados a la administración de distintos sectores de la economía peruana. Se erige lo que se da en llamar “*el Estado como ogro filantrópi-*

co”⁷ (Adrianzén 2005). Sin embargo, las condenas sociales a la propuesta económica y política del gobierno son mínimas. Había, según aprecia parte de la literatura, cierto consenso en la necesidad de asumir un cambio estratégico en la administración de la economía (Torre 1998). Todo ello se produce en el contexto de una recurrente violación a la libertad de expresión, persecución a las posturas opositoras, intervención en el Poder Judicial, el autogolpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso y el Tribunal Constitucional, acciones tendientes a perpetuar en el poder al elenco gobernante.

Posteriormente, Alberto Fujimori logró la creación de la figura constitucional de la reelección presidencial y se inicia un lento retorno a la institucionalidad democrática. En 1995, obtiene nuevamente la Presidencia de la República, esta vez en el marco de la alianza “*Cambio 90 – Nueva Mayoría*”. Esta última aglutinaba a figuras representativas de los intereses conservadores que, en 1990, habían otorgado su voto de confianza a Vargas Llosa. Influye, decisivamente, en esta reelección la política antiterrorista que el gobierno había desplegado para desarticular a Sendero Luminoso⁸ (CIDOB 2005). Fujimori derrota en los comicios a Javier Pérez de Cuellar, antiguo Secretario General de la ONU.

La segunda gestión fujimorista puede ser definida a partir de la presencia de un elevado déficit fiscal, el peso incremental de la deuda externa, la continuidad de la implementación de los planes de ajuste estructural, la profundización de la red clientelar propiciada desde el seno del poder, las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos y la persecución a quienes se oponían a las políticas gubernamentales. Luego de un artilugio legal, Fujimori consigue, sobre finales de la década, que se le autorice la participación para ser candidato por tercera vez a la Presidencia. En esta oportunidad, obtiene el triunfo electoral como candidato de “*Perú 2000*”, alianza de distintas agrupaciones políticas. El candidato opositor era Alejandro Toledo quien fue postulado por la agrupación “*Perú Posible*”. Obtiene, acusaciones de fraude mediante, la reelección e inicia su nuevo mandato en medio de una severa condena de la comunidad internacional. Tiempo después, luego de la aparición de material audiovisual que explicitaba la corrupción imperante en su gobierno, convoca a elecciones y renuncia a su investidura aprovechando una estancia en el exterior. Asume el gobierno Valentín Paniagua, Presidente del Congreso y dirigente de Acción Popular.

⁷ La expresión “ogro filantrópico”, usada por Alberto Adrianzén para caracterizar al Perú de Fujimori, fue creada por Octavio Paz para describir al Estado priista mexicano.

⁸ La captura de Abimael Guzmán, momento inicial de la desaparición de la agrupación terrorista, implicó un ascenso en la popularidad de Alberto Fujimori.

2.2) *El giro a la derecha ideológica de los partidos políticos tradicionales en Venezuela*

Mientras que, en el caso peruano, las resistencias sociales a las reformas económicas no fueron la constante, en Venezuela, la situación difiere enormemente. Se sostiene que este país presenta un proceso de reformas con avances y retrocesos permanentes (Paramio 2006). El Presidente Carlos Andrés Pérez, de Acción Democrática (AD), el partido político con mayor arraigo electoral en el histórico marco de lucha bipolar venezolano, introduce, a inicios de 1989, un conjunto de reformas a las que se las denomina “*Gran Viraje*”⁹. En el arribo de Pérez al poder, influye decisivamente el recuerdo de su exitosa Presidencia en los años setenta, cuya gestión se caracterizó por el uso populista-clientelista de la renta petrolera. El plan contenía medidas de aplicación inmediata y otras entendidas como de aplicación paulatina. Según Guerra y Ponce de Moreno (2005), las principales medidas anunciadas fueron, entre otras: decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a su programa, liberación de las tasas de interés, unificación cambiaria con la eliminación del tipo de cambio preferencial, eliminación de los antiguos precios subsidiados, adelgazamiento del aparato estatal, apertura de los mercados, determinación del tipo de cambio en el mercado libre de divisas e incremento gradual de las tarifas de los servicios públicos.

El partido al que pertenecía el Presidente, de filiación socialdemócrata, no compartía el paquete de medidas que había sido diseñado por un conjunto de técnicos que no pertenecían a la agrupación. Días después de tomar la iniciativa carácter público, tiene lugar el famoso “*Caracazo*”, explosión social que fue duramente reprimida y poseyó una influencia, nada desdeñable, en lo que restó de la Presidencia de Pérez. Los analistas coinciden en que quienes impulsaron las reformas no supieron apreciar, efectivamente, el menguado nivel de apoyo que éstas generarían en la sociedad. Se afirma que la sociedad venezolana, a diferencia de la peruana, aún no se hallaba persuadida respecto a la conveniencia de la implementación de políticas rupturistas con el modelo de desarrollo hasta el momento imperante (Torre, 1998) (Paramio, 2006). En este marco de convulsión, acontecen, en 1992, dos intentos de golpes de Estado que denunciaban la situación de marginación en la que se encontraba parte importante del pueblo venezolano y que catapultan al reconocimiento público al teniente coronel Hugo Chávez, actual Presidente de Venezuela.

Entre las consecuencias más relevantes de esta política económica, la literatura especializada destaca, en primer lugar, el deterioro de las condiciones

⁹ Este plan también es conocido como el VIII Plan de la Nación.

sociales de la población, fenómeno que venía desarrollándose desde 1983 y se profundizó con el ajuste. El descontento social trajo consigo desestabilización política al provocar una ruptura violenta del orden público. El número de protestas populares sufre un crecimiento exponencial: aproximadamente 58 (cincuenta y ocho) eventos conflictivos por mes. Los partidos políticos y las asociaciones gremiales vieron disminuida su capacidad reguladora y se generaron múltiples formas de reclamos populares que fueron respondidos represivamente por el Estado.

En segundo término, la ejecución de las reformas económicas se vincula a la erosión de la imagen del gobierno, en general, y del Presidente, en particular. El Poder Ejecutivo se enfrentaba regularmente con el Parlamento y no podía recrear apoyos, por lo que se dificultaba la construcción de márgenes amplios de gobernabilidad (Guerra y Ponce de Moreno 2005) (Biderbost 2007).

La segunda incursión de Carlos A. Pérez culmina con su desplazamiento del cargo como consecuencia de las acusaciones que se vertían sobre su persona respecto a la transferencia irregular de dinero a sus aliados políticos nicaragüenses. En 1993, Rafael Caldera, antiguo Presidente y ex-militante de COPEI (el otro partido tradicional, de tendencia demócrata-cristiana), llega a la Presidencia postulado por Convergencia, agrupación de reciente creación, y enemistado con la asociación a la que había pertenecido. Caldera se había convertido en líder moral reconocido luego de su discurso de oposición a la política económica de Pérez y a su evaluación de los intentos de golpes de Estado perpetrados. Su propuesta se basaba, fundamentalmente, en desarticular las transformaciones emanadas del llamado “*Gran Viraje*” y aplicar políticas de neto corte populista. Los principales indicadores macroeconómicos reflejan un marcado deterioro y, tiempo después, se decide aplicar un conjunto de políticas alineadas con lo recomendado por los organismos internacionales de crédito y contradiciendo, de esta manera, lo comprometido al momento de iniciar su gestión (Torre 1998) (Guerra y Ponce de Moreno 2005).¹⁰

A diferencia de la propuesta de Pérez, el nuevo esquema prevé que vastos sectores de la sociedad resultarán perjudicados en la transición hacia un nuevo modelo económico y se pone en práctica, paralelamente a la implementación de propuestas neoliberales, un conjunto de políticas sociales que pretendan compensar las consecuencias no deseadas de la nueva estrategia. Si bien la política económica de Caldera logra recuperar el signo positivo en la evolución del PBI, contener la inflación y permitir el asentamiento de capital extranjero, los indicadores de salario real, desempleo y pobreza exhiben regis-

¹⁰ Este plan es conocido como la “Agenda Venezuela” o IX Plan de la Nación.

tros alarmantes. A su vez, la explosión multipartidista al interior del Congreso a partir de 1993, fenómeno hasta el momento desconocido en la historia venezolana, impidió la concretización de gran parte de las políticas ideadas desde el Ejecutivo. La abstención electoral aumenta en cada elección y la frustración popular respecto al sistema tradicional de partidos se acrecienta. Finalmente, sobre finales del decenio, Hugo Chávez, antiguo referente militar de uno de los intentos de golpe de Estado de 1992, gana las elecciones con la promesa de una reforma constitucional y la puesta en marcha de una serie de políticas de corte populista. Su gobierno, favorecido por el precio internacional del petróleo (principal recurso de exportación venezolano) ha desplegado una batería de políticas tendientes a atender las problemáticas de los sectores más empobrecidos de la población en el marco de lo que ha dado en llamarse la “*Revolución Bolivariana*” (Molina y Pérez 2000).

3) El voto económico. Una breve introducción.

Dentro del conjunto de teorías que pretenden explicar el comportamiento electoral, se encuentra aquélla que enfatiza las razones económicas del voto. Este esquema, de base racional, formulado inicialmente por Anthony Downs (1957), sostiene que los individuos deciden su voto en función, por un lado, de los beneficios que evalúen como consecuencia de la gestión gubernamental y, por el otro, de los probables beneficios que pudiesen obtener a partir de la llegada al poder de quienes se encuentran en la oposición. Por ello, los ciudadanos observan, detenidamente, las acciones u omisiones del partido gobernante y la credibilidad de quienes, fuera del gobierno, pugnan por la consecución de determinados espacios. En efecto, el voto no sería el mero resultante de la ubicación social-cultural y económica de quien sufraga sino que se hallaría inducido por su juego psicológico-perceptivo. Al respecto, se admite que las campañas comunicativas pueden ser eficaces herramientas en vistas a influir en la percepción del votante (Kuschick 2004).

Conforme los métodos de investigación en ciencia política se han ido sofisticando y complejizando, la teoría del voto económico ha incorporado nuevos elementos de análisis. Key Jr. (1968) sostiene que los ciudadanos, al momento de votar, consideran dos datos que han pasado a conformar dos dimensiones del llamado voto económico “*normal*”:¹¹ lo contextual y lo temporal. La primera cuestión hace hincapié en averiguar si el entorno eco-

¹¹ El voto económico normal es aquél que, según lo ya referido, desde la lógica “castigo-recompensa” evalúa a los políticos y al desempeño de sus gobiernos. En tal sentido, de haber resultado o prever ser beneficiado por X personalidad política, partido político o alianza electoral, el voto ciudadano, para con ellos, será positivo o de apoyo.

nómico personal o la situación económica nacional es lo que determina el voto, mientras que lo segundo indaga respecto al momento histórico que genera mayor preocupación económica (el pasado o el futuro) en el ciudadano (Gramacho 2005).

A partir de nuevas investigaciones, se han detectado comportamientos que tienden a apartarse de la “normalidad” del voto económico en momentos en los que acontecen cambios macroeconómicos de envergadura y existe un clima de cierta turbulencia social. Przeworski (1993) ha identificado una conducta “*intertemporal*” del sufragio que refleja que los ciudadanos apoyan planes económicos que implican ajustes debido a que interpretan los eventuales sufrimientos como inevitables para la consecución de un mejor escenario económico ulterior. Stokes (1997) ha hallado dos nuevas desviaciones del voto económico normal. Una de ellas es la conducta “*antidotista*”. Es aquella en la que el ciudadano culpa a los políticos opositores por su rechazo a las reformas económicas y mantiene su apoyo al gobierno. La otra refiere a la posición “*distributivista*” que explica la circunstancia en la que un ciudadano cree en el éxito relativo de las políticas reformistas pero les niega su apoyo porque ha padecido más que otros individuos durante el ajuste o porque unos han sufrido más que otros en el mismo periodo (Gramacho 2005).

4) La pobreza, el desempleo y el comportamiento electoral en Perú y Venezuela durante la década de los noventa ¹²

En el presente apartado, se describirá y analizará la evolución que presentaron, durante el decenio de los noventa, los indicadores de desempleo y pobreza en los países analizados. Ambos guarismos reflejan los efectos, en términos de exclusión social, que fueron producidos por la ejecución de las reformas económicas estructurales. Así mismo, se observará el comportamiento electoral asumido por el electorado mientras acontecía el referido proceso de empeoramiento de las condiciones económicas y sociales ¹³. A

¹² Se entiende por pobreza al grado de satisfacción de las llamadas necesidades básicas, consideradas universales y que comprenden una canasta mínima de consumo individual o familiar (alimentos, vivienda, vestuario, artículos del hogar), el acceso a los servicios básicos (salud y educación, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte público), o ambos componentes. Los pobres son aquellas personas que no logran adquirir, con sus ingresos, la canasta que incluye servicios y pueden satisfacer sus necesidades nutricionales. Los indigentes son aquellas personas que no logran adquirir, con sus ingresos, la canasta básica de alimentos. (CEPAL, 2000: 83).

Lo que se registra bajo el nombre de desempleo es el conjunto de personas que no han trabajado más de una hora durante un corto periodo de referencia pero que están dispuestas y activamente buscando trabajo (OIT 1995).

su vez, se procederá a la aplicación de los conceptos de la teoría de voto económico, expuestos en la sección anterior, para explicar, aproximadamente, la conducta de los votantes en estos dos países sudamericanos.

En el caso del país heredero de la tradición incaica, el desempleo urbano, indicador utilizado para la medición del problema del paro laboral en América latina por CEPAL, presenta, durante la gestión de Alberto Fujimori, una reducción en el periodo 1990-1991. Ello puede explicarse a partir de las expectativas generadas en torno al cambio de rumbo en política económica. Sin embargo, el siguiente registro (1992) ya presenta un relevante aumento del desempleo que es explicado como consecuencia de la desaparición de puestos de trabajo en antiguas empresas vernáculas (lo que también es registrado por el índice de mortandad o defunción empresarial)¹⁴ que no lograron adaptarse a la apertura indiscriminada y a la reducción de la estructura estatal. Ulteriormente, la tasa de desempleo, a lo largo de toda la década, se mantiene entre el 8.5 y el 9.5 %, no siendo posible la recreación de los puestos de trabajo desaparecidos (ver Cuadro N° 1).

CUADRO N° 1
TASA DE DESEMPLEO URBANO
1985-2000 (%)

	Perú	Venezuela
1985	10.1	13.1
1986	5.3	11.0
1987	4.8	9.2
1988	7.1	7.3
1989	7.9	9.2
1990	8.3	10.4
1991	5.9	9.5
1992	9.4	7.8
1993	9.9	6.6
1994	8.8	8.7
1995	8.2	10.3
1996	8.0	11.8
1997	9.2	11.4
1998	8.5	11.3
1999	9.2	14.9
2000	8.5	14.0

Fuente: CEPAL, Base de Estadísticas e Indicadores Sociales. (<http://www.eclac.cl/badeinso/Badeinso.asp>).

¹³ Para el análisis del comportamiento electoral, se han tomado los resultados de las elecciones nacionales presidenciales y parlamentarias de ambos estados durante el periodo referido.

¹⁴ El índice de mortandad o defunción empresarial registra la cantidad de unidades productivas desaparecidas en un territorio determinado durante un período dado (FAO 2005).

La evolución de la pobreza y la indigencia presenta un recorrido semejante. La detención del proceso hiperinflacionario permitió, al promediar el decenio, la disminución del porcentaje de población que se hallaba en situación tanto de pobreza como de indigencia. Desaparece lo que se denomina “*impuesto inflacionario*” o disminución permanente del poder adquisitivo que, como afirma la teoría económica, afecta, en mayor medida, a los sectores más vulnerables. Sin embargo, hacia finales de la década, se registra un incremento del porcentaje de personas en la pobreza y la indigencia como efecto de la destrucción acelerada de puestos de trabajo. Éste ha sido un itinerario que se ha evidenciado en otros estados latinoamericanos (Torre 1998) (ver Cuadro N° 2).

CUADRO N° 2
MAGNITUD DE LA POBREZA E INDIGENCIA 1990-2002
(% sobre el total de la población)

	Perú		Venezuela	
	Pobreza	Indigencia	Pobreza	Indigencia
1990	39.8	14.4		
1991	55.3	24.2		
1992				
1993	56.8			
1994	53.4	19.0	48.7	19.2
1995	45.3	19.3		
1996	44.1	18.7		
1997	47.6	25.1	48.0	20.5
1998				
1999	48.6	22.4	49.4	21.7
2000				
2001	54.8	24.4		
2002			48.6	22.2

Fuente: CEPAL, 2004b 324-325, Instituto Cuanto - Lima, Perú.
y Banco Central de Reservas de Perú (<http://www.bcrp.gob.pe/>)

¿Cuál fue el comportamiento del electorado en el período? En el año 1990, momento en el que accede al poder Alberto Fujimori, se percibe un claro voto castigo dirigido a los partidos políticos tradicionales. La situación de caos macroeconómico e hiperinflación descontrolada provoca la búsqueda de nuevas alternativas, situación que se refleja en el duelo por la Presidencia entre Fujimori y Vargas Llosa, ambos de extracción apartidaria (Torre 1998). A pesar de ello, el APRA mantiene una representación parlamentaria importante, lo que genera críticas desde el gobierno electo por su, según su criterio, actitud obstaculizadora ante la propuesta programática de la nueva gestión. Dos nuevos fenómenos se vislumbran, entonces, en el sistema político peruano: la formación de nuevas agrupaciones políticas que son utilizadas como vehículos para la participación electoral y la progresiva desinsti-

tucionalización del sistema tradicional de partidos políticos (Mainwaring y Scully 1995) (Freidenberg 2005). La elevada volatilidad electoral y la habilidad de candidatos no partidistas de ganar puestos, entre otros indicadores, así lo atestiguan (ver Cuadro N° 3).

CUADRO N° 3					
Elecciones Presidenciales 1990		Elecciones Presidenciales 1990		Elecciones Parlamentarias 1990	
Primera vuelta	Segunda vuelta	Senadores	Diputados		
IU	Cambio 90	Frente Democrático	Frente Democrático	1 791 077	1 492 513
IS	Fredemo	APRA	APRA	1 390 954	1 240 395
Cambio 90	Votos válidos	Cambio 90	Cambio 90	1 204 132	819 527
Apra	Votos nulos	Izquierda Unida	Izquierda Unida	542 049	497 764
Fredemo	Votos blancos	Izquierda Socialista	Izquierda Socialista	303 216	264 147
Válidos	Votos emitidos	Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos	Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos	112 388	124 544
Blancos	Ausentismo	Votos válidos	Votos válidos	5 539 680	
Nulos	Total de inscritos			779 759	62 955
Emit.	0			556 511	336 168
Ausent.	10 013 225			6 875 950	4 961 470
Inscritos	10 013 225			3 136 375	917 992
				10 013 225	939 074
					Votos emitidos
					6 818 536
					Ausentismo
					3 194 689
					Total de inscritos
					10 013 225

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) – Perú

A lo largo del periodo, tanto los comicios presidenciales como las elecciones parlamentarias, reflejan un claro voto de confianza para con la política del primer mandatario. Entre las razones que pueden encontrarse para este comportamiento, se puede hablar de la existencia de cierto voto “*intertemporal*”. En otros términos, a pesar de que muchos resultaban perjudicados en las fases iniciales de la implementación del ajuste, era tan fuerte y disuasivo el recuerdo del *pandemonium* precedente que muchos optaron por el sostenimiento en el tiempo de las transformaciones económicas. A su vez, como ya se ha sugerido, el perfil clientelar de la gestión de Alberto Fujimori podría haber retenido en su haber parte del electorado que sufría reveses económicos.¹⁵ Como puede leerse de las estadísticas, los partidos tradicionales (Acción Popular y APRA) poseen una presencia marginal en los recuentos electorales (ver Cuadro N° 4).

Sobre el final del decenio fujimorista, si bien el descontento respecto a los excesos del régimen se encontraba en pleno crecimiento y los indicadores aludidos presentaban números preocupantes, los resultados electorales no parecen hacerse eco de lo acontecido. Evidentemente, como ya se ha comentado, el fraude electoral denunciado por la oposición pudo haber distorsionado la voluntad de los electores. Sin embargo, éste es un elemento sobre el que no es posible enunciar, al menos momentáneamente, ningún tipo de aseveración definitiva (ver Cuadro N° 4).

En Venezuela, la tasa de desempleo urbano presenta un ascenso considerable en los primeros años del gobierno de Pérez, luego del inicio de la aplicación del “*Gran Viraje*”. Entre los factores que condujeron a la alza del indicador, se hallan, entre otros, el desmantelamiento de la estructura subsidiaria que, hasta el momento, había facilitado la supervivencia de numerosas empresas locales y la reducción de la actividad económica como resultado no deseado de la situación social imperante (Guerra y Ponce de Moreno 2005). Posteriormente, se revierte el proceso de destrucción de empleo como consecuencia del crecimiento en el PBI y las inversiones realizadas en el sector petrolero para, tiempo después, retomar, ya durante la gestión de Rafael Caldera, la senda previa. Una vez más, el desempleo sube como producto de la incertidumbre reinante respecto a la política económica por la que optaría el gobierno, la retracción del PBI, los reajustes sobre los costos y precios luego de la apertura definitivamente practicada, las crisis desatadas en otros mercados emergentes, la desaceleración en el mercado de la construcción y las fuertes caídas del

¹⁵ En relación a este estilo gubernamental, aplicado también en la Argentina menemista, García Delgado y otros (1998) lo han descrito como neopopulismo de derecha por la especial alianza intersectorial que era propiciada desde el seno del poder.

precio del petróleo a nivel internacional (cierre del grifo petrolero). Junto con el alza en el desempleo, se acelera también el proceso inflacionario (ver Cuadro N° 1).

La trayectoria de los indicadores de pobreza e indigencia en Venezuela repiten el sendero expuesto en oportunidad de revisión del paro. Las transformaciones cambiarias, fiscales y monetarias han perjudicado, en mayor medida, a los sectores menos aventajados de la sociedad venezolana. Los autores afirman que este flagelo se ha generalizado y ello puede ser delatado a partir del empobrecimiento substancial que han sufrido individuos antiguamente pertenecientes a estratos socio-económicos medios. Se observa un importante salto en el registro aludido entre 1990 y 1994 como reflejo de las modificaciones estructurales acaecidas, la desaparición de puestos de trabajo y la permanencia en el tiempo del proceso inflacionario. Los valores se mantienen a lo largo de la década y la envergadura del problema puede detectarse en la elevada deserción escolar (35,1 % en 1998) y la insuficiencia nutricional evidenciada en vastos sectores de la población. A su vez, se critica la política social que intentaba compensar los cuadros descritos por su no correcta apreciación de los colectivos poblacionales que precisaban, efectivamente, este tipo de asistencia (Guerra y Ponce de Moreno 2005) (ver Cuadro N° 2).

El comportamiento electoral del pueblo venezolano presenta a lo largo del período ¹⁶ distintas fases. En 1988, al acceder por segunda vez Pérez a la Presidencia de la República, la conducta de los votantes tiende a repetir el arquetípico esquema bipartidista que había caracterizado a Venezuela en los últimos años. Molina y Pérez (1996) explican este proceder como resultado de la existencia de un sistema presidencialista en el que existe un criterio electoral de mayoría relativa. En consecuencia, los electores sólo votaban a quienes, según suponían, tenían probabilidades reales de conquistar el poder (ver Cuadro N° 5). Pérez sustituye en el poder a Jaime Lusinchi (también de Acción Democrática), quien culmina su mandato en medio de un clima social que permitía entrever la desaprobación del rumbo económico adoptado. A pesar de ello, Acción Democrática es nuevamente elegida para gobernar. En ello, en detrimento de explicaciones vinculadas al voto económico normal, influyeron decisivamente, por un lado, la personalidad de Pérez (enfoque cortoplacista del voto), quien era recordado por su exitosa anterior andadura populista y, por el otro, las lealtades partidarias de fuerte arraigo (enfoque psicológico del voto) (Molina y Pérez 1996).

¹⁶ Se ha tomado como fecha inicial para la realización de este análisis en el caso venezolano el año 1988, momento en el que accede a la Presidencia Carlos Andrés Pérez.

La situación se modifica substancialmente en 1993. Aunque quien obtiene la victoria electoral es Rafael Caldera, ex Presidente y antiguo militante de COPEI, lo hace como candidato de una nueva agrupación (Convergencia) que se asocia junto a otras fuerzas menores (MAS, entre otros). Se puede afirmar que el escenario describe la presencia de un voto “*normal*” por parte del electorado que se hallaba influido, asimismo, por la decepción que había generado el cambio de trayectoria evidenciado por Pérez. La convulsionada situación social, descrita teóricamente por los indicadores presentados, influye en el comportamiento del electorado. Molina y Pérez (1996) ensayan, en relación a este proceder, una explicación de índole sociológica. Admiten que por ser Venezuela una sociedad subdesarrollada, ello provoca un “*descontento endémico*” en relación a la autoridad y acontece, en consecuencia, un desgaste de ésta que finaliza en su reemplazo ante circunstancias comiciales. En el ámbito parlamentario, se pasa de un bipartidismo a un multipartidismo limitado, en el que nuevas fuerzas comparten (Convergencia, LCR), en términos casi semejantes, la representación con los partidos tradicionales. La desinstitucionalización del sistema de partidos parecía dar sus primeros pasos: la fortaleza de los vínculos de la sociedad con los partidos y la estabilidad en los patrones de competición interpartidista se habían deteriorado. (Mainwaring y Scully 1995) (ver Cuadro N° 6).

La elección en la que Hugo Chávez resulta ganador, como candidato de la alianza Polo Patriótico, confirma los patrones de conducta descriptos. Por segunda vez consecutiva, el voto económico tiende a castigar a los ejecutores de una política no prevista ni deseada por el electorado (Torre, 1998). Ello facilitó que un personaje completamente apartidario acceda a la primera magistratura. La tendencia hacia el multipartidismo se acentúa y nuevos partidos realizan su aparición, entre ellos, el Movimiento V República (MVR) que postula originalmente a quien es elegido Presidente. Estos nuevos partidos, de acuerdo a lo reseñado por Molina y Pérez (1999), no poseen una estructura institucional fuerte y dependen de la figura de un líder (Chávez para el caso del MVR y Salas Röemer en el *Proyecto Venezuela*, PRVZL). Los partidos tradicionales mantienen una exigua, en comparación a previos registros, participación en el Poder Legislativo. En relación al voto económico, puede hacerse mención de la eventual actuación del llamado voto “*distributivista*” que se opone a los ejecutores de las políticas reformistas por ser quienes lo sufragan los más afectados por la puesta en marcha de las últimas. Por último, la hipótesis citada por Molina y Pérez (1994) respecto a la influencia del subdesarrollo en el comportamiento electoral no debe descartarse para este periodo histórico puntual (ver Cuadro N° 7).

CUADRO N° 5					
Elecciones Presidenciales 1988		Elecciones Diputados 1988 (%)		Elecciones Senadores 1988 (%)	
Acción Democrática	3859180	A. Democrática	48,3	A. Democrática	47,8
COPEI	2955061	COPEI	33,3	COPEI	43,5
MAS-MIR	198361	MAS	9	MAS	6,5
ORA	63795				
Total Votos Nulos	209574				
Total Votos Escrutados	7524760				
Abstención	1660887				
Población Electoral	9185647				

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Venezuela

CUADRO N° 6					
Elecciones Presidenciales 1993		Elecciones Diputados 1993 (%)		Elecciones Senadores 1993 (%)	
(cantidad de votos)					
		A. Democrática	27,1	A. Democrática	32
Convergencia	956529	COPEI	26,1	COPEI	28
MAS	595042	LCR	19,7	LCR	18
Acción Democrática	1304849	Convergencia	12,8	Convergencia	12
COPEI	1241645	MAS	11,8	MAS	10
Total Votos Nulos	212517				
Total Votos Escrutados	5829216				
Abstención	3859579				
Población Electoral	9688795				

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Venezuela

CUADRO N° 7					
Elecciones Presidenciales 1998		Elecciones Diputados 1998 (%)		Elecciones Senadores 1998 (%)	
(cantidad de votos)					
		A. Democrática	30	A. Democrática	35,2
MVR	2625839	MVR	22,2	MVR	22,2
MAS	588643	COPEI	13,5	COPEI	13
PPT	142859	PRVZL	9,7	MAS	9,3
PVRZL	1879457	MAS	8,2	PRVZL	7,4
AD	591362	PPT	3,4	Convergencia	3,7
COPEI	140792	LCR	2,9	LCR	1,9
IRENE	127849	Convergencia	1,9	PPT	1,9
Total Votos Nulos	450987				
Total Votos Escrutados	6988291				
Abstención	4024729				
Población Electoral	11013020				

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) - Venezuela

5) De la des-institucionalización del sistema de partidos a las asambleas constituyentes

5.1) *La constitución fujimorista: la legitimación de la ausencia del Estado de Derecho en Perú*

Los procesos constituyentes de Perú y Venezuela han transitado por rutas similares en las que *outsiders* al sistema buscaron legitimar su proyecto político a través de un nuevo proyecto constitucional. El desarrollo del proceso constituyente en Perú fue precedido por un conjunto de coyunturas que desembocaron en una crisis de legitimidad del sistema, lo cual alteró la composición de las relaciones de poder. Por ello, el abordaje teórico del fujimorismo y los mecanismos que llevaron a su consolidación implica una revisión de las condiciones que lo propiciaron.

La polarización de las opciones políticas y la emergencia de *outsiders* en la elección de 1990 evidenciaron signos de crisis de legitimidad del sistema de partidos tradicional. Detrás de este desgaste subyace la incapacidad de la clase política tradicional, insertada en los espacios institucionales, para hacer frente a los problemas relativos a la crisis económica y a la violencia política estructural. No obstante, como se indicó, estas elecciones se desa-

rollaron con la participación de los partidos políticos tradicionales. Su poder relativo no era, en absoluto, desdeñable: Alberto Fujimori venció, en aquella oportunidad, en segunda vuelta con el apoyo de Izquierda Unida y APRA.

El colapso definitivo del sistema de partidos fue en 1992 a partir del autogolpe de Estado propiciado por la camarilla fujimorista. Se ha expresado que la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales se debió, en gran medida, a un inadecuado manejo de la crisis económica por parte de la clase política existente. Alberto Fujimori en 1992 alcanzó altos índices de popularidad y legitimidad, principalmente, por haber logrado bajar la inflación en más de un 3.5 %. Tanaka (2001) señala que es el *timing* del golpe, justamente cuando se estabilizan los índices inflacionarios, lo que motivó la aprobación popular del golpe y la legitimidad de Fujimori. El mismo autor señala que si este golpe se hubiera dado en 1991, en el ambiente de crispación política y falta de apoyo por parte del Congreso, Fujimori habría fallado en su intento y, probablemente, hubiera sido destituido.

El golpe surge como una estrategia ante la oposición del Congreso por la adopción de las medidas económicas de corte neoliberal que Fujimori estaba implementando. Esta oposición provenía, sobre todo, de los partidos de izquierda. En la elección del 1990 las fuerzas afines a Fujimori no lograron consolidar una mayoría absoluta, por tanto, en un entorno de débil apoyo al Ejecutivo por parte del Congreso, la polarización se incrementaba cada vez más.

La estrategia empleada por Chávez en Venezuela se aproxima a la de Fujimori en Perú. En ambos casos, ninguno de los dos contaba con una mayoría absoluta dentro del Congreso y, de igual forma, ambos enfrentaban oposiciones dentro del mismo. Con los altos índices de aprobación que en 1992 alcanzaban un 60 % (Tanaka 2001), Fujimori promovió un golpe para destituir al Congreso. No obstante de que iniciaba una ruta autoritaria, éste dio un viraje hacia la vía constitucional, convocando en el mismo año a la elección del Congreso Constituyente Democrático (CCD) que, además de las funciones relativas a un Congreso ordinario, tendría también la obligación de redactar una nueva Constitución.

Como se verá que también sucedió en el caso chavista, la redacción de una nueva Constitución le permitió a Fujimori, entre otras cosas, la reversión del escenario de fuerzas políticas y cambiar las reglas políticas en su favor. No obstante, no debe soslayarse que el cambio en la dirección de las acciones de Fujimori se debieron en gran medida a la presión internacional. La elección de un congreso y la redacción de una nueva Constitución fue la estrategia que le permitió construir un aura de legitimidad hacia el exterior.

En relación a las cuestiones de tipo procedimental vinculadas a la asamblea, debe decirse que las normas para la elección del Congreso Constituyente Democrático fueron expedidas por el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, y se contenían en la Ley para la Elección del Congreso Democrático. La elección se realizó en un distrito electoral único, con un sistema electoral proporcional, en la que los electores elegían una lista, pudiendo elegir dos congresistas de su preferencia dentro de la misma. En el proceso, las principales fuerzas opositoras se abstuvieron de participar, y aquellas que lo hicieron obtuvieron alrededor de un cuarto de los votos. La mayoría absoluta fue alcanzada por las fuerzas afines a Fujimori. En el referéndum para la aprobación de la Constitución, la aprobación ganó con un margen muy estrecho, lo cual, según Tanaka (2001), reflejaba problemas en el proceso de consolidación del proyecto fujimorista.

5.2) La constitución bolivariana: el inicio de la pulseada chavista-antichavista

Tal y como ocurrió en Perú, la propuesta de una Asamblea Constituyente en Venezuela surge en un ambiente de deslegitimación del sistema político y desinstitucionalización del sistema de partidos. En el caso de Venezuela, esta crisis se vio alentada por la difícil situación económica generada por la deuda externa y el deterioro progresivo en las condiciones de vida. A ello, se sumó la conflictividad social auspiciada por el enfrentamiento de las fuerzas políticas hegemónicas del sistema. Los intentos de golpe de Estado acaecidos en 1992 son una evidencia de la crispación política y social que el país enfrentaba.

En este contexto de desgaste político, surge la propuesta de Hugo Chávez, retomando el discurso de la Constituyente (antes se habían generado propuestas sin éxito) como una alternativa para la viabilidad política y social del país. Chávez logra posicionar el tema de la Asamblea Constituyente como la única alternativa ante los problemas sociales y económicos que el país vivía. En cuanto Hugo Chávez asumió el poder en 1999, emitió el Decreto N° 2. En el mismo, toma como fundamento de su acto la *Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política* que preveía la posibilidad de una consulta popular frente a ciertas decisiones del gobierno y el artículo 4° de la Constitución relativo al principio de soberanía. En este decreto, se convocaba una consulta popular bajo las siguientes preguntas: “¿Convoca usted a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social Participativa? y ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante Acto de Gobier-

*no fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?”.*¹⁷

A posteriori, la Corte Suprema de Justicia jugó un rol fundamental dentro del proceso al declarar la viabilidad de la Asamblea Constituyente mediante la sentencia N° 17 del 19 de enero de 1999. En los contenidos de dicho documento el magistrado ponente Humberto J. La Roche argumentó la legitimidad y procedencia de la Asamblea Constituyente en razón de ser refrendada por la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano a partir de un acto de consulta pública. Entre los principios jurídicos que se invocaron, está el de la supraconstitucionalidad, el cual sostiene que el modelo positivista no prevé ninguna posibilidad de que el pueblo ejerza su soberanía para darse una nueva Constitución. En consecuencia, dentro del ámbito de las instituciones jurídicas del Estado, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que se sustenta en el apoyo popular puede legitimar el nuevo ordenamiento jurídico.

Este importante fallo también se pronuncia sobre la caducidad de un sistema y la incapacidad de las instituciones para responder a los retos del cambio político y social, proclama el derecho de autodeterminación popular, más allá del dogmatismo constitucional, y señala la importancia del derecho como un instrumento de cambio social y como una vía para el cambio político.¹⁸ Las Bases de la Convocatoria fueron expedidas por el Consejo Nacional Electoral en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Estas bases definieron un sistema de elección mayoritario mediante la elección de setenta y seis constituyentes en veinticuatro regiones, coincidentes con los Estados y el Distrito Federal en base a la población de cada entidad. Veinticuatro constituyentes fueron electos en una sola circunscripción y tres diputados fueron designados como representantes de las comunidades indígenas de asentamiento ancestral en territorio venezolano. El 98 % de los votos fue obtenido por las fuerzas afines al Presidente Hugo Chávez.

6) Conclusiones

En los últimos años, se ha comenzado a indagar respecto a la dimensión política de las reformas económicas llevadas a cabo en las jóvenes demo-

¹⁷ Tomado del informe “Fraude a la democracia” Caso Venezuela, realizado por el Comité Técnico de Substanciación en Caracas, Venezuela, 2004.

¹⁸ Véase: *Bases jurisprudenciales de la supraconstitucionalidad*, Tribunal Supremo de Justicia, Colección de Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, Caracas Venezuela.

cracias latinoamericanas (Paramio 1999). La literatura se ha concentrado en describir la actuación de los partidos políticos, las agrupaciones de la sociedad civil y el electorado durante el periodo en el que se dejaba atrás la llamada Matriz Estado-céntrica para avanzar hacia una Matriz Mercado-céntrica (Cavarozzi 1996). El presente trabajo ha pretendido describir el comportamiento de los votantes peruanos y venezolanos en tiempos en los que se ejecutaban reformas estructurales y empeoraban los indicadores que reflejan la exclusión social y económica. A su vez, se ha pretendido arrojar luz sobre los procesos que condujeron desde la desinstitucionalización de los sistemas de partidos a la puesta en marcha de procesos constitucionales en ambos países.

Lo analizado en estas páginas ha permitido certificar lo ya expuesto por Torre (1998). La creencia en la necesidad de las reformas difirió de un escenario a otro. Mientras ambos electorados, optaron, en determinado momento, por la elección de primeros mandatarios que representaban la antítesis de sus respectivas clases políticas tradicionales, las respuestas a las reformas económicas fueron divergentes. En Perú, el desorden macroeconómico previo al gobierno de Alberto Fujimori le allanó el camino de cortapisas para la aplicación de ajustes estructurales. La sociedad peruana descreía de los partidos políticos históricos y facilitó el ascenso al poder de un inexperto en cuestiones de gobierno. Evidentemente, también actúa positivamente en su reiterado éxito electoral la particular red clientelar que supo enhebrar con recursos estatales.

Lo opuesto acontece en Venezuela. La sociedad aún no había detectado la precisión de modificaciones substanciales en el plano económico. Por ello, en las contiendas electorales y en la persistente convulsión social, puede hallarse una explícita desaprobación a la clase político-partidaria tradicional y a su propuesta. Tanto en Perú como en Venezuela, es posible advertir la utilidad de la teoría del voto económico “*normal*” y de sus más recientes actualizaciones. Al mismo tiempo, cabe decir que su capacidad explicativa debe ser edulcorada con otros aportes procedentes de la sociología electoral y la teoría del voto.

Por último, cabe recordar que nuevos escenarios políticos y económicos han sido el legado de esta trayectoria descrita. De la aplicación durante el decenio de 1990 de recetas neoliberales y su propiciación del recorte de las atribuciones históricamente reconocidas al Estado latinoamericano, se ha pasado a una reivindicación del rol que compete al aparato estatal como institución que, bajo la aplicación de mecanismos redistributivos de naturaleza diversa, debe limitar el libre desenvolvimiento de las fuerzas del mercado. La actual crisis económico-financiera ha venido a confirmar esta tendencia no sólo ya en países en vías de desarrollo sino, también, en las

sociedades del mundo desarrollado. Este nuevo escenario político-económico actualiza la necesidad de la aplicación de las variables y conceptos aquí utilizados para una correcta detección de la existencia o no de cierta continuidad de los fenómenos sometidos a análisis.



Bibliografía

- ADRIANZÉN, A. (2005) “El Estado: un ogro filantrópico”, *Revista Quehacer*, Lima, pp. 20-23.
- CALDERON, Fernando. (2004) *Notas sobre la crisis de legitimidad del Estado y la democracia*, en La democracia en América latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, PNUD.
- CAVAROZZI, M. (1996) *El capitalismo político tardío y sus crisis en América latina*. Rosario, Homo Sapiens Ediciones.
- CIEZA, D. y GONZÁLEZ, A. (2005) “Del menemismo al kirchnerismo: los movimientos sociales en Argentina en un nuevo contexto latinoamericano”. Workshop on “Empire and Dissent: US Hegemony in Latin America”. Program on Global Security and Cooperation at the Social Science Research Council Cuernavaca, Mexico – March 4-6, 2005.
- DEGREGORI, C. (1993) “Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú” en ADRIANZÉN, A. y OTROS. *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*. Lima, IFEA-IEP, 1993.
- FREIDENBERG, F. y ALCÁNTARA, M. (2005). “Partidos, sistemas de partidos y democracia en América Latina” (manuscrito en prensa).
- GARCÍA DELGADO, D. (1998) *Estado-Nación y globalización. Fortalezas y sensibilidades en el umbral del Tercer milenio*. Buenos Aires, Ariel.
- GÓMEZ CALCAÑO, Luis y ARENAS, Nelly. (2002) “¿Modernización autoritaria o actualización del populismo?” en RAMOS ROLLON, Marisa, *Venezuela: Rupturas y continuidades del Sistema Político (1999-2001)*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca.
- GRAMACHO, W. (2005) “Ciclos de información y funciones de popularidad: El periodo Cardoso en Brasil (1995-2002)”, *Desarrollo Económico*, N° 177 (abril-junio), pp. 99-121.
- GUERRA, A. y PONCE de MORENO, B. (2005): “Un modelo político para la gerencia pública en América Latina”. Edición electrónica a texto completo en www.eumed.net/libros/2005/agbp/ (Diciembre 2005).
- KUSCHICK RAMOS, M. (2004) “Teorías del comportamiento electoral y algunas de sus aplicaciones”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, N° 190, pp. 47-72.
- LORA, E. y OLIVERA, M. (2003) “*Economic Reforms, Party Systems and Elections in Latin American*”. Work in progress.
- MADUEÑO, Luis E. (1997), “La ingobernabilidad de la democracia: El declive de la legitimidad: Venezuela y Colombia”, *Revista Venezolana de Ciencia Política* N° 11, 13-17, Venezuela.

- MAINWARING, S. y SCULLY, T. (1995) "La construcción de las instituciones democráticas". Santiago, CIEPLAN, Introducción y conclusiones.
- MARAVALL, J. y PRZEWORSKI, A. (1999) "Reacciones políticas a la economía", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, N° 87 (junio-setiembre 1999), pp. 11-52.
- MARCUS-DELGADO, Jane; TANAKA, Martín. (2001) *Lecciones del final del fujimorismo*, Colección Mínima 47, Instituto de Estudios Peruanos, Perú.
- MOLINA, J. y PÉREZ, C. (1996) "Los procesos electorales y la evolución del sistema de partidos en Venezuela" en ÁLVAREZ, Ángel (Coord.) *El sistema político venezolano: crisis y transformaciones*. Caracas, UCV, 1996, pp. 193-238.
- . (1999) "La democracia venezolana en una encrucijada: las elecciones nacionales y regionales de 1998", *Revista América Latina Hoy*, N° 21.
- . (1999) "Venezuela: los procesos electorales de 1999", *Boletín Electoral Latinoamericano*, N° XXII, (julio-diciembre 1999).
- . (2000) "Radical Change at the Ballot Box: Causes and Consequences of Electoral Behavior in Venezuela's 2000 Elections", *Latin American Politics and Society*, 46-1, (Spring 2004), pp. 103-134
- PARAMIO, L. (1999) "Las dimensiones políticas de las reformas económicas en América Latina", *Zona Abierta*, N° 88-89, pp. 5-74.
- . (2006) "Crisis y cambio del modelo económico" en ALCÁNTARA, M. y OTROS, *1980-2005. El retorno a la democracia*. Síntesis, Madrid, Vol. 6.
- REMMER, K. (1993) "The Political Economy of Elections in Latin American, 1980-1991", *The American Political Science Review*, Vol. 87, N° 2 (Jun., 1993), pp. 393-407.
- ROBERTS, K. y WIBBELS, E. (1999) "Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, institucional, and Structural Explanations". *The American Political Science Review*, Vol. 93, N° 3 (Sep., 1999), pp. 575-590.
- TANAKA, Martín. (2001) *La Situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios del siglo*, estudio realizado para La Comisión Andina de Juristas en Lima.
- TORRE, J. (1998) *El proceso político de las reformas económicas en América Latina* Buenos Aires, Editorial Paidós.